

DELITO : TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACENTES
O SICOTRÓPICAS

RUC Nº : 1900040587-9

RIT Nº : 72-2021

ACUSADO: GIOVANNI PAOLO HIDALGO IBARRA
MARGARITA IRMA GALLARDO RIVERA

Santiago, dos de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que los días veintiuno y veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ante esta Sala del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por los jueces Fernando Valenzuela González, Pablo Urrutia Sulantay y Andrea Coppa Hermosilla, se desarrolló la audiencia de juicio oral en causa RUC N°1900040587-9, RIT N°72-2021, seguida en contra de GIOVANNI PAOLO HIDALGO IBARRA, Cédula Nacional de Identidad N°14.412.260-7, nacido en Santiago el 21 de octubre de 1978, 44 años, soltero, comerciante, domiciliado en Cristóbal Colón 0542, depto. 102, villa Colón, en San Bernardo; y MARGARITA IRMA GALLARDO RIVERA, Cédula Nacional de Identidad N°16.072.410-2, nacida Santiago el 02 de septiembre de 1985, 37 años, soltera, comerciante, domiciliada en Avenida Américo Vesputio N°1775, Población Raúl Mazzone, en Cerrillos.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por el fiscal Patricio Rosas Estay y Tufit Bufadel Godoy; en tanto que la representación del acusado Giovanni Hidalgo Ibarra fue asumida por los defensores de confianza Claudia Tello y Gonzalo Campos Becerra; y la de Margarita Gallardo Rivera, por el abogado defensor de confianza Pablo Iturrieta Muñoz; todos con domicilios y forma de notificación ya registrados en el Tribunal.

El presente juicio oral se realizó por la modalidad de video conferencia vía plataforma Zoom, considerando la situación sanitaria del país y conforme a lo dispuesto a la ley N°21.226, actas 41 y 42 de la Excma. Corte Suprema, AD

335-2020 de la misma Corte que establece la modalidad de teletrabajo como forma de regular el funcionamiento de los Tribunales, para lo cual se realizó previamente una audiencia de coordinación para determinar la forma de desarrollo de la audiencia, logrando de esta forma participar, escuchar a los testigos, y visualizar el resto de la prueba mediante plataforma Zoom; pudiendo en todo momento los acusados conferenciar privadamente con sus abogados defensores.

SEGUNDO: Acusación. Que los hechos materia de la acusación, según se lee en el auto de apertura, son los siguientes: *“En circunstancias de que funcionarios de la SIP (SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN POLICIAL), de la 34ª Comisaría de Carabineros de Cerrillos, contaban con orden judicial de entrada, registro e incautación otorgada por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago respecto del inmueble ubicado en calle Avenida Américo Vespucio N° 1775, en Cerrillos, diligenciaron la orden judicial el día 11 de Julio del 2019, procediendo a detener a las 16:35 hrs. en el interior del inmueble a los imputados MARGARITA IRMA GALLARDO RIVERA y GIOVANNI PAOLO HIDALGO IBARRA, los cuales poseían y guardaban en el interior del inmueble, específicamente en el dormitorio de ambos, 25 bolsas contenedoras de clorhidrato de cocaína que arrojaron un peso bruto de 27 gramos (NUE 4024475), un envoltorio de nylon transparente embalado con nylon negro, contenedor de clorhidrato de cocaína que arrojó un peso bruto de 296 gramos (NUE 4024474), un envoltorio de cinta adhesiva transparente contenedor de clorhidrato de cocaína que arrojó un peso bruto de 102 gramos (NUE 4024477).*

Además, se incautaron 27 bolsas contenedoras de marihuana que arrojaron un peso bruto de 13 gramos (NUE 4024480), un trozo de marihuana que arrojó un peso bruto de 14 gramos (NUE 4024478) y restos de marihuana que arrojaron un peso bruto de 9 gramos (NUE 4024479). Debe señalarse que la marihuana incautada corresponde a la especie vegetal del género cannabis sativa y contiene THC (TETRAHIDROCANNABINOL), principio activo de la sustancia estupefaciente referida.

Además, se incautaron diversos elementos utilizados en la dosificación de la droga consistente en: un dosificador de plástico, un molidor, una balanza

digital, además se incautaron \$98.080.- en una caja metálica y el imputado HIDALGO IBARRA portaba \$39.000, en dinero efectivo procedente de la venta de drogas.

Debe señalarse que la investigación efectuada por la SIP de la 34ª comisaría de carabineros, se origina con denuncia recibida en Fiscalía el 3 de Enero del 2019 y en virtud de la cual se otorgó orden de investigar, realizándose diversas diligencias investigativas tales como vigilancias, seguimientos, como asimismo control de infractores al artículo 50 de la Ley 20.000, con lo cual se logró establecer la comercialización de droga en el inmueble referido”.

Calificación Jurídica y participación: A juicio del persecutor, estos hechos son constitutivos respecto de los acusados MARGARITA IRMA GALLARDO RIVERA y GIOVANNI PAOLO HIDALGO IBARRA, del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, ilícito previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la Ley 20.000, en grado de ejecución consumado, atribuyéndoles a ambos encartados una participación en calidad de autores, conforme lo dispone el artículo 15 N° 1 del Código Penal, al haber tomado parte en la ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa.

En cuanto a las modificatorias de responsabilidad penal: Señala el persecutor que no beneficia a los imputados atenuante alguna y si los perjudica a ambos la agravante de ser reincidentes en delitos de la misma especie, del artículo 12 N°16 del Código Penal.

Y luego de las citas legales que indica, solicita se le imponga a cada uno de los acusados la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de 100 unidades tributarias mensuales, accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, la obtención de huella genética conforme lo dispone ley de Registro de ADN, todo ello con costas.

Además, conforme lo dispone el artículo 31 del Código Penal y 45 de la Ley 20.000, se solicita el comiso de las especies incautadas en este procedimiento.

TERCERO: Alegatos de apertura y clausura: Que el **Ministerio Público, en su alegato de apertura**, manifestó que las políticas públicas se

sustentan muchas veces en casos de flagrancia, gracias al control vehicular y peatonal, pero este caso viene a cambiar la tendencia, puesto que se realizó investigación, se hicieron vigilancias a distancias, se interceptó a un comprador y luego se ejecutó una entrada y registro del domicilio, y en el interior se halló más de 350 gramos de droga en poder de la pareja que ocupaba conjuntamente el domicilio. Los testigos darán cuenta de las diligencias realizadas.

La **defensa de Giovanni Hidalgo, en su alegato de apertura**, indicó que el Ministerio Público no logrará acreditar la participación de su representado, pese a que no desconoce la existencia de un delito.

La **defensa de Margarita Gallardo, en su alegato de apertura**, planteó que este será un juicio de determinación de pena, solicitando que en su momento se evalúe la colaboración sustancial que hará la acusada, concordante con la declaración ya prestada ante la fiscalía.

En su **alegato de clausura, el Fiscal** señaló que en este caso se desplegaron esfuerzos para cumplir con lo ofrecido, y la prueba rendida permitió reconstruir la investigación, los dichos de los funcionarios fueron contestes en lo medular, y sus dichos se complementaron con la prueba documental, pericial y fotografías. Todos dieron cuenta de que la investigación se inició con una denuncia que daba cuenta de que la “Maiga” vendía droga, así es como llegan al domicilio y encuentran que era un lugar de acopio. La acusada omitió señalar que ese día Giovanni estaba en el domicilio, aunque él vivía allí, y también cuál era su participación en los hechos. Sin embargo, la participación de él es clara, ya que la droga y el dinero estaban sobre la cama, en el dormitorio principal, matrimonial, que era ocupado por ambos, Giovanni no solo vivía antes allí, sino que también a la época de los hechos, tanto así que se encontró su cedula de identidad y también una libreta de ahorro de Margarita, ambos encima del mueble de la televisión. Además, había ropa de hombre en el inmueble, sumado a que Giovanni fue detenido allí también, refrendado por la madre de Margarita, Amelia, quien dijo que ellos tienen una relación y que Giovanni vive allí y que es él quien transportaba droga en la casa. Además, la droga estaba en dos muebles de la misma habitación. El hecho de que figure registrado otro domicilio, no cambia el hecho de que

residiera allí. Y además es lógico que supiera de la existencia de la droga. Precisa que en el caso de Giovanni lo que se le imputa es la guarda, no venta, y de hecho, guardaba en varias partes, y distintos tipos de droga. La prueba pericial demostró que las sustancias dubitadas eran marihuana y clorhidrato de cocaína.

En su **alegato de clausura, la defensa de Giovanni Hidalgo**, alega que el Fiscal le atribuye participación a su representado en calidad de autor de tráfico, pero ella mantiene su alegación de inocencia, y además viene a controvertir que se trate de un delito de tráfico, ya que el conjunto de circunstancias muestra que el destinatario era el consumidor final. Atendido el grado de pureza, la droga total es inferior a lo planteado, además hay una denuncia de venta de droga al menudeo, los vecinos lo vieron, y se corroboró por la policía, además, parte de la droga estaba dosificada. Y encontraron bolsas, una balanza y un molidor. Que Giovanni Hidalgo frecuente el inmueble no implica que el viva allí, la droga no estaba a la vista, además no hay avistamientos de venta de droga respecto de él. De hecho, en el domicilio viven más personas y solo se detuvo a ellos dos. Un funcionario dijo que había ropa de hombre, pero no lo dijo antes ni se fijó fotográficamente. La policía vio a Margarita vendiendo, además ella era el blanco investigativo. La prueba documental ofrecida por su parte va en el mismo sentido. Subsidiariamente, pide condena por microtráfico.

En su **alegato de clausura, la defensa de Margarita Gallardo**, reiteró que este es un juicio de determinación de pena, destinado a establecer el quantum a fijar, por lo que deberá valorarse la declaración de la acusada, por haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, ya que testificó en estrados, antes de haberse oído la prueba del ministerio público, ratificando lo ya declarado durante la investigación, dando detalles de la posesión, fechas y lugares. Ella no negó que Giovanni fuera su pareja a esa época, por eso se explica la presencia de la ropa y la cédula.

En su **réplica, el ministerio público** se opone a que se trate de un delito de microtráfico, puesto que lo hallado fueron aproximadamente 461 gramos, además no solo había droga dosificada, sino que también unidades cortadas de unidades mayores, propio de la idea de distribuir en mayores

cantidades, no solo al menudeo, también había distintos tipos de drogas, y distintos grados de pureza de la cocaína, demostrando que proviene de fuentes distintas, más el dinero \$98.080 y \$39.000, que corresponden a droga que se vendió. Que sea un punto de venta, no significa que no sea también un punto de acopio o producción de droga. Fue Margarita quien dijo que Giovanni sabía que había droga en la casa, él tenía pleno conocimiento de que había droga, porque esta se guardaba en los cajones, junto con la balanza y la ropa de hombre.

En su **réplica**, la **defensa de Giovanni Hidalgo** precisa que la madre de Margarita solo habla de la intervención de Giovanni en el delito pero no dice nada respecto de su hija, por lo que pareciera que su verdadera intención es exculpar a su hija o a los demás habitantes de la casa que no fueron detenidos. Asimismo, reitera que si se considera la pureza de la droga, solo se encontraron 14 gramos de marihuana prensada y 126.28 gramos de cocaína, y que las concentraciones son distintas por el abultamiento, propio del intento de aumentar el volumen de la droga, el cual no es parejo, ya que se hace “al ojo”. Finalmente, el dinero encontrado estaba en una caja y el otro en la billetera de Hidalgo.

La **defensa de MARGARITA GALLARDO** no hizo uso de su derecho a **réplica**.

CUARTO: Autodefensa. La acusada **MARGARITA IRMA GALLARDO RIVERA**, renunció a su derecho a guardar silencio y optó por declarar en la audiencia de juicio, manifestando que iba a asumir toda la responsabilidad de lo ocurrido, y que el día 11 de julio de 2019, a eso de las 16:30 horas aproximadamente, en Américo Vespucio N°1775, Cerrillos, donde ella vivía con su mamá y con sus hijas, aunque ese día también estaba su hija y la pareja de su hija, llegó personal de la 52° comisaría, y le encontraron un chauchero rojo encima de la mesa, donde habían como veinte bolsas chicas de falopa y otras bolsas chicas dosificadas de marihuana. Eso es lo que declaró en la fiscalía, ella dijo que tenía las bolsas chicas. Ella entregó el chauchero, y también otra droga que tenía en el cajón, y se la dio al policía, que eran como cien gramos que guardaba en un calcetín, luego en el cajón, en el doble fondo, encontraron casi treinta gramos más. La droga la encontraron en su habitación, estaba en

un cajón de la cómoda, donde ella guardaba su ropa, el cajón tenía doble fondo, también encontraron \$99.000.- que eran de la caja vecina del almacén que tenía su mamá. Lo que está diciendo hoy no lo dijo antes, declaró en la fiscalía, pero no dijo lo mismo, solo reconoció que eran de ella las bolsas chicas, eso lo declaró el 10 de enero de 2020. Agrega que conoce a Giovanni, porque él era y sigue siendo su pareja, lo conoce del sur, él pasaba con ella y se quedaba a dormir en la casa de ella, pero no siempre, porque a su mamá no le gustaba. Giovanni vive en San Bernardo, pero no sabe la dirección, la droga que encontraron no le pertenece él, pero él si sabía lo que ella hacía, él no le ha vendido droga nadie, al menos no en el domicilio de ella. Él vivía con ella cuando encontraron la droga.

El acusado **GIOVANNI PAOLO HIDALGO IBARRA**, optó por guardar silencio y no declarar.

Ninguno de los acusados hizo uso del derecho de emitir **palabras finales**.

QUINTO: Convenciones probatorias. Que del auto de apertura de juicio oral emana que los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

SEXTO: Prueba rendida en el juicio. Que, a fin de acreditar el sustrato fáctico de su acusación, el Ministerio Público rindió en primer término, la declaración del funcionario de carabineros **Cristian Rodrigo Gutiérrez Gutiérrez**, quien señaló haber participado en una investigación realizada con por la SIP de la subcomisaria de Vista Alegre, que se inició por antecedentes que entregaron los vecinos de la comuna de Cerrillos, que daban cuenta de que en el domicilio de Américo Vespucio N°1775, Cerrillos, una mujer de apodo “la Maiga” se estaría dedicando a la venta de droga. Con esos antecedentes, el 24 de diciembre de 2018, evacuan el informe N°1590, mediante el cual dan cuenta a la Fiscalía de Maipú los antecedentes recabados y solicitan que se les despache una orden de investigar, la que se les despachó el 10 de enero de 2019. Con ella, el 8 de mayo de 2019 se planificó un servicio de vigilancia discreta a distancia del domicilio, llegando al lugar eso de las 16:50 horas. A las 17:05 horas ven llegar a un sujeto en bicicleta, quien, luego de un dialogo con Margarita Gallardo Rivera, ingresa al inmueble y tras un momento breve, sale y se aleja en la misma bicicleta. Al sujeto lo controlan en Avenida Américo

Vespucio con calle Universo y lo identifican como Carlos Mallea Soto, quien, voluntariamente, entregó un envoltorio de nylon transparente, con clorhidrato de cocaína, de 0.8 gramos, de lo cual se dio cuenta a través del parte N°62, por infracción de la ley 20.000. Además, se despachó el oficio N°521, de 23 de mayo de 2019 informando a la fiscalía los resultados obtenidos y pidiendo obtener una orden de entrada y registro. Esta se autorizó el 2 de julio de 2019 por diez días. El 11 de julio de 2019 en compañía de personal del GOPE y dos ejemplares caninos detectores de droga, ingresaron al domicilio, observando que el dormitorio principal era ocupado por Giovanni Hidalgo Ibarra y Margarita Gallardo Rivera, lo cual confirmaron ya que allí encontraron una libreta de ahorro a nombre de Gallardo Rivera y la cedula de identidad de Hidalgo Ibarra. También incautaron droga, marihuana y cocaína, una parte estaba dosificada, pero también encontraron un trozo de marihuana sin dosificar, un dosificador plástico blanco, una pesa digital negra con restos de cocaína, un moledor dorado con restos de marihuana y un rollo de bolsas de plástico similar a las que se usaron para dosificar la droga. Confirmaron que “Maiga” era el apodo de Margarita Gallardo Rivera. A él le correspondió supervisar el procedimiento. La droga estaba en un mueble al costado de la cama. Se detuvo a la pareja, y los reconoce en la audiencia. Explica que solo debieron descerrajar una puerta que les permitía subir del primer al segundo nivel.

Se le exhibe un **video de filmación, contenido en el CD correspondiente a la NUE 4024368**, explicando que en él se observa a un hombre en bicicleta, en el frotis de Américo Vespucio N°1775, donde hay un almacén, un local comercial, y se ve que desde el interior sale el sujeto en bicicleta, y que se dirige hacia Cerrillos. También se ve un vehículo marca Daewoo Racer color gris estacionado al frente, el consumidor fue identificado como Carlos Mallea Soto. Los documentos que mencionó estaban sobre un mueble, al lado de la tele. Participaron en el procedimiento los funcionarios Hermosilla, Quiñones, y Guerra. En definitiva, encontraron veinticinco bosas de nylon con clorhidrato de cocaína, de un total de 27 gramos, dos envoltorios grandes, uno de 291 gramos y el otro de 102 gramos, veintisiete bolsas de marihuana de 13 gramos, un trozo de marihuana de 14 gramos, y unos restos de marihuana de 9 gramos. El funcionario Cabezas fue quien levantó las

evidencias. En una caja metálica azul, hallaron \$98.080 en efectivo y en la billetera de Giovanni Hidalgo encontraron otros \$39.000.- No recuerda si él portaba la billetera.

Enseguida, testificó el **funcionario de carabineros Eduardo Anselmo Hermosilla Cea**, quien manifestó que a él le correspondió ejecutar una orden de investigar que estaba a cargo del Sargento Segundo Gutiérrez, por la cual el día 11 de julio de 2019 se ingresó al inmueble ubicado en Américo Vespucio N°1775, Cerrillo. A él le correspondió sacar las fotografías. En el interior, subió al segundo piso, donde estaba el dormitorio, y sobre la cama encontraron un maletín metálico con \$98.080, que se levantó con la NUE4024473, además de un banano negro con una bola de una sustancia vegetal envuelta en plástico color negro, que a la prueba de campo arrojó presencia de cannabis sativa, con un peso de 14 gramos y que se levantó con la NUE4024478, además de un molidor con restos de marihuana NUE40244483. En el mismo dormitorio, sobre el rack de la televisión, encontraron la cedula de identidad de Giovanni Hidalgo Ibarra, dentro de una caja de perfumes con bolsas de nylon y una cuchara blanca plástica con restos de una sustancia beige. En el cajón del mueble, encontraron una libreta de ahorro del Banco Estado a nombre de Margarita Gallardo Rivera, al lado, un calcetín blanco con 27 envoltorios de una sustancia vegetal, que a la prueba de campo arrojó presencia de cannabis sativa, de un peso de 13 gramos, que se levantó con la NUE4027904. Asimismo, en el cajón derecho, en la parte posterior, encontraron una balanza digital y un monedero celeste con 25 envoltorios, que a la prueba de campo arrojó presencia de clorhidrato de cocaína, con un peso de 27 gramos, que se levantó con la NUE4024475. En otro mueble, encontraron dos bolas de nylon, un tipo ladrillo negro, que a la prueba de campo arrojó presencia de clorhidrato cocaína, con un peso de 996 gramos, que se levantó con la NUE4024474, y la otra, de la misma sustancia, con un peso de 102 gramos, que se levantó con la NUE4024477. Se hace ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal para evidencia contradicción y corrige su declaración en el sentido de que la droga incautada bajo la NUE NUE4024474 pesó 296 gramos y no 996.

Se le exhibe un **set de 14 fotografías**, señalando que las fotografías N°1 y 2 corresponden al exterior del inmueble de Américo Vespucio N°1775,

donde existe un almacén, explicando que en el segundo piso está el dormitorio principal, donde encontraron una caja azul metálica con dinero y un banano sobre la cama, mostrándose en el recuadro el detalle del contenido, la N°3 muestra el banano, donde en un costado se ve el moledor y al otro la bola negra con marihuana; N°4 muestra la prueba de campo, con color marrón positivo a cannabis y el pesaje, 14 gramos; N°5, muestra el mismo dormitorio, el rack de la televisión, y sobre él una caja de perfume con bolsas de nylon y una cuchara con restos de una sustancia color beige, además de la cedula de identidad de Giovanni Hidalgo, N°6 muestra el mismo mueble, en un cajón, una libreta de ahorro de Margarita Gallardo, N°7, el interior de un cajón del mueble, donde se observa un calcetín con 27 envoltorios de marihuana, N°8 muestra la prueba de campo, color marrón positiva a cannabis y el pesaje de 13 gramos; N°9 se observa el monedero celeste con 25 envoltorios de clorhidrato de cocaína y balanza, N°10, muestra la prueba de campo, con coloración azul positiva a cocaína y el pesaje de 27 gramos; N°11, muestra la prueba de campo, color marrón positiva a marihuana y el pesaje; N°12, muestra otro mueble del mismo dormitorio con dos paquetes, uno como ladrillo y el otro, una bola de nylon transparente, se ve también al funcionario Guerra Ruiz mientras revisa, N°13 muestra el paquete que estaba en el mueble, la prueba de campo y el pesaje de 296 gramos, N°14, se observa la balanza con 25 papelillos, la prueba de campo con coloración azul positivo a cocaína, y un pesaje de 27 gramos. Asimismo, se le exhibe **una fotografía de un segundo set**, y explica que ésta muestra el exterior del almacén, y que corresponde a imágenes del video filmado por los funcionarios Gutiérrez y Aravena.

A continuación depuso el **funcionario de carabineros René Abraham Quiñones Aravena**, miembro de la SIP de la 34° comisaría de Cerrillos, quien explicó que el día 24 de diciembre de 2018, se ofició a la fiscalía informando que por información de vecinos de Cerrillos, supieron que una mujer, apodada la “Maiga” vendería droga en pequeñas cantidades en el domicilio de Américo Vespucio N°1775, Cerrillos, y se pidió que se les despachara una orden de investigar, la cual se recibió y se hicieron diligencias, vigilancias discretas y a distancias. En particular el 8 de mayo de 2019, a partir de las 16:50 horas, y a eso de las 17:05 horas, se observó a un sujeto delgado, con chaqueta negra,

jeans oscuros y a bordo de una bicicleta, que llegó al domicilio, habló con Margarita Gallardo Rivera y se retiró por Américo Vespucio al oriente. Lo interceptaron y lo controlaron en calle El Universo, y se identificó como Carlos Mallea Soto, quien voluntariamente entregó una bolsa con una sustancia color blanco, similar a clorhidrato cocaína, a la cual se le hizo prueba de campo, y arrojó coloración positiva. Se informaron los resultados a la fiscalía y se pidió una orden de entrada, la que se ejecutó el 11 de julio de 2019, cerca de las 17:00 horas. Se ingresó con el GOPE y con la unidad de adiestramiento canino, se buscó en el dormitorio principal del segundo piso, y en él estaban Giovanni Hidalgo y Margarita Gallardo, allí encuentran una libreta de ahorro de ella y la cedula de identidad de él, además de droga, del tipo marihuana y clorhidrato de cocaína, y otros objetos propios del tráfico, como una balanza.

En particular, se incautaron 25 bolsas de nylon transparente, con una sustancia de color blanco, que en la prueba de campo arrojó coloración positiva a cocaína, con un peso total de 27 gramos, levantado bajo cadena de custodia NUE 4024475; un envoltorio de nylon transparente, embalado con nylon negro, con una sustancia cristalina color blanco, que en la prueba de campo arrojó coloración positiva a cocaína, con un peso total de 296 gramos, levantado bajo la NUE 4024474; un envoltorio de cinta adhesiva transparente con una sustancia cristalina color blanco, que en la prueba de campo arrojó coloración positiva a cocaína, con un peso total de 102 gramos, registrado bajo la NUE 4024477; 27 bolsas con una sustancia vegetal, que en la prueba de campo arrojó coloración positiva a marihuana, con un peso total de 13 gramos, levantados bajo la cadena de custodia NUE4024480; restos de una sustancia vegetal que en la prueba de campo arrojó coloración positiva a marihuana, con un peso total de 9 gramos, levantados bajo el NUE4024479; un trozo de una sustancia vegetal, que en la prueba de campo arrojó coloración positiva a marihuana, con un peso total de 14 gramos, levantados bajo la cadena de custodia NUE4024478; un dosificador plástico con restos de una sustancia de color blanco, que en la prueba de campo arrojó coloración positiva a cocaína, sin peso, registrado bajo la NUE 4024481; un molidor metálico con restos de una sustancia vegetal, que en la prueba de campo arrojó coloración positiva a marihuana, sin peso, levantado con la NUE 4024483; una balanza digital, sin

marca ni modelo, NUE 4024482; un rollo de bolsas de nylon transparentes, NUE 4024484; dinero en efectivo.

Los dos sujetos fueron detenidos al interior del dormitorio y los reconoce como aquellos que están presentes en la audiencia.

Se le exhibe un **set de 5 fotografías**, explicando que la fotografía N°1, corresponde al exterior del domicilio, y que sabe que era el domicilio de los dos porque había una libreta de ahorro de ella, la cédula de identidad de él, además de vestimenta de mujer y de hombre en el interior del dormitorio; N°2, muestra al consumidor en la bicicleta, N°3, muestra los datos del registro civil del comprador. La droga se remitió a Instituto de Salud Pública para su análisis de pureza, él la llevó. En la diligencia de entrada y registro participaron los funcionarios Guerra, Yubini, Cabezas, Prieto, Gutiérrez y Hermosilla, según recuerda. Precisa que había vestimentas de hombre y de mujer en el interior del dormitorio y otros objetos propios de una pareja, aun cuando no hay fotos de esos objetos. No se le pidió cedula a los detenidos, solo se les aseguró y luego se les detuvo.

Finalmente, declaró el **Sargento Segundo de Carabineros Jaime Ramírez Vargas**, miembro de la subcomisaría Vista Alegre, quien explicó que el día 30 de noviembre de 2019 se recibió en la SIP de la unidad, una instrucción particular del fiscal Luis Vaccia Soria, pidiendo tomar declaración a Jaqueline Gallardo Rivera, Rosa Gallardo Rivera y Amelia Rivera Olguín. A él le correspondió ejecutar dicha instrucción y las dos primeras no quisieron declarar, la tercera si lo hizo. El 9 de enero de 2020, doña Amelia Rivera expuso ser la dueña del inmueble de Américo Vespucio N°1775, donde ella vivía con su familia, y su hija Margarita Gallardo Rivera, añadió que ésta conoció por redes sociales a un tipo que estaba preso en Puerto Montt, conocido como Giovanni Hidalgo Ibarra, quien se vino a vivir con ella a ese domicilio cuando salió en libertad. Explicó que él entraba y que cuando ella lo veía él salía de esa casa con bolsos que contenían paquetes de droga. Las otras dos mujeres que no quisieron declarar eran hijas de Amelia, hermanas de Margarita, y vivían en la misma casa. Amelia Rivera no dijo qué actividades hacía su hija, tampoco que cometiera delitos con Giovanni. No dijo que tuviera

una mala relación con Giovanni, tampoco que Giovanni se quedara en la casa con Margarita solo a veces porque ellos se llevaran mal.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Procesal Penal, se incorporó la **prueba pericial** consistente en: 1.- Oficio Reservado N°12709-2019, emanado del Instituto de Salud Pública, que conduce el **protocolo de análisis químico de la droga correspondiente a los códigos de muestra obtenidos de las NUE 4024474, NUE 4024475 y NUE 4024477**, el cual concluyó que corresponden a cocaína clorhidrato al 35%, al 22% y al 17%, respectivamente, además de lidocaína cloruros y Levamisol. Asimismo, se adjunta el informe sobre efectos y peligrosidad para la salud pública de la cocaína clorhidrato, suscrito por la el perito químico Gisela Vargas Pérez; 2.- Oficio Reservado N°1404, emanado del Servicio de Salud Metropolitano Central, que contiene el **protocolo de análisis químico de droga correspondiente al informe confidencial N°1404, NUE 4024480**, correspondiente a veintisiete envoltorios de nylon transparente contendores de una sustancia vegetal seca color café, equivalente a 12.0 gramos brutos, 9.2 gramos netos, arrojando como resultado que se trataba de cannabis sativa; además del informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de la cannabis, suscrito por la perito químico Maribel Contreras M.; 3.- Oficio Reservado N°1514, emanado del Servicio de Salud Metropolitano Central, que contiene el **protocolo de análisis químico de droga correspondiente al informe confidencial N°1514, NUE 4024478**, correspondiente a un envoltorio contenedor de una sustancia vegetal seca prensada color café, equivalente a 14.7 gramos brutos, 13.9 gramos netos, arrojando como resultado que se trataba de cannabis sativa, además del informe de efectos y peligrosidad de la cannabis, suscrito por la perito químico Maribel Contreras M.; 4.- Oficio Reservado N°1515, emanado del Servicio de Salud Metropolitano Central, que contiene el **protocolo de análisis químico de droga correspondiente al informe confidencial N°1515, NUE 4024479**, correspondiente a 4.9 brutos y 4.9 gramos netos de una sustancia vegetal seca triturada color café, arrojando como resultado que se trataba de cannabis sativa L (marihuana); además del informe de efectos y peligrosidad de la cannabis, suscrito por la perito químico Maribel Contreras M.

Enseguida, se incorporó como **documental** el **Acta de recepción de droga N°4489-2019, emanado del Servicio de Salud Metropolitano Oriente**, correspondiente a las NUE 4024474, 4024475 y 4024477, que consignó haberse recibido en dicha institución evidencias consistentes en 298,8 gramos, 23.8 gramos y 103.4 gramos, respectivamente, todos de cocaína, en formato de polvo blanco, además de un contenedor de nylon blanco envuelto en “alusa”, veinticinco bolsas y una esfera de cinta adhesiva; y **el Certificado de Depósito a Plazo reajutable** del dinero incautado, emanado del BancoEstado, equivalente a \$98.080

A su turno, la defensa de **Giovanni Hidalgo Ibarra** ofreció como **documental**, una **Hoja de datos de identificación del acusado, emanado del Registro Civil**, de fecha 17-02-2019, donde figura como su dirección la de Av. Colón N°542, San Bernardo y la **Primera hoja del extracto de filiación y antecedentes del encartado Giovanni Paolo Hidalgo Ibarra**, que consigna como su domicilio el de Avenida Colón N°542, San Bernardo.

SÉPTIMO: Valoración de la prueba y hecho acreditado. Que, sin perjuicio de no haberse controvertido por las defensas la ocurrencia del hecho punible, consistente en la existencia de droga en el interior del domicilio ubicado en Américo Vespucio N°1775, Cerrillos, lo cierto es que dicha circunstancia resultó plenamente acreditada con la prueba rendida, tanto testimonial, como pericial, documental y otros medios.

En efecto, las conclusiones de los químicos farmacéuticos del Instituto de Salud Pública y del Servicio de Salud Metropolitano, que quedaron plasmadas en los respectivos protocolos de análisis, determinaron que las sustancias incautadas durante el procedimiento policial correspondían, en un caso a 427 gramos de clorhidrato de cocaína, que se almacenaban en dos contenedores y en 25 bolsas de dosificación individual, y en el otro, a 28 gramos netos de cannabis sativa, que se había dosificado en 27 envoltorios individuales y otra parte en un trozo de sustancia prensada.

Que estas conclusiones son, además, plenamente concordantes con las declaraciones de los testigos, los funcionarios policiales que ejecutaron la diligencia de entrada y registro, quienes dieron cuenta del hallazgo de la droga por haberla percibido por sus propios sentidos, desde que pudieron observarla

directamente donde se encontraba, en el interior de un cajón de un mueble, en el interior de un banano que estaba sobre la cama y en el interior del cajón de un rack de televisión, a las cuales les hicieron prueba de campo, pudiendo observar que estas pruebas arrojaron coloración positiva a la presencia de cocaína y cannabis.

Que asimismo, los funcionarios policiales expusieron también como la investigación se inició por una denuncia anónima de vecinos del sector, que daban cuenta de venta de droga en el domicilio por parte de una mujer apodada “Maiga”, a quien posteriormente identificaron como Margarita Gallardo Rivera, conductas de comercialización que fueron confirmadas tras vigilancias discretas en la propiedad y fiscalización de los compradores, diligencias que fueron plasmadas en fotografías y en video, los cuales fueron exhibidos al tribunal para ilustrar los relatos antes dichos.

Que, enseguida, cabe consignar que la defensa de la acusada Gallardo Rivera tampoco controvertió su participación en los hechos, por lo que la controversia se centró en determinar si al acusado Hidalgo Ibarra le cupo o no participación culpable en estos hechos, estimando la unanimidad de la sala que la prueba rendida sobre este punto, resultó suficiente para dar por establecido más allá de toda duda razonable que ambos acusados, conjuntamente, acopiaban y custodiaban la droga hallada en esas dependencias, desde que los testimonios inculcatorios aportados en estrados fueron suficientemente concordantes entre sí, y resultaron además refrendados por las imágenes exhibidas al tribunal a través de fotografías y un video.

En efecto, si bien los funcionarios indicaron no haber visto a Giovanni Hidalgo entrar o salir del domicilio, ni tampoco ejecutar cualquier acción de comercialización de droga, lo cierto es que la vigilancia discreta se realizó únicamente el día 8 de mayo de 2019, a partir de las 16:50 horas, y concluyó a las 17:05 horas del mismo día, cuando avistaron al comprador Carlos Mallea, quien fue fiscalizado, encontrándose en su poder la dosis de clorhidrato de cocaína que compró a Margarita Gallardo, de manera que si bien la diligencia puede resultar relevante para acreditar la participación de la acusada, en ningún caso es suficiente para descartar la intervención de Hidalgo Ibarra,

atendida la brevísima extensión de tiempo durante la cual se realizó la diligencia.

Asimismo, los funcionarios explicaron que ellos le atribuyeron responsabilidad penal a Hidalgo Ibarra, en primer término, porque establecieron que ambos acusados eran pareja y que compartían el dormitorio, puesto que en él había ropa de mujer y de hombre, una libreta de ahorro de ella y la cédula de identidad de él, que estaba junto a una caja de perfumes que en su interior contenía un rollo de bolsas de nylon, de iguales características a aquellas usadas para la dosificación de una parte de la droga encontrada, además de una cuchara plástica con restos de un polvo blanco, circunstancia que fue refrendada por los dichos de la acusada, Margarita Gallardo, y de su madre, Amelia Rivera, quienes precisaron que Hidalgo Ibarra residía en dicho inmueble a la época de la detención; a lo cual debe sumársele que toda la droga y los objetos relacionados con su manipulación fueron encontrados en el interior de dicha habitación, los cuales se encontraban visibles a simple vista, sea encima del rack de la televisión, encima de la cama, o en el interior de un cajón de un mueble, por lo que el acusado no puede desconocer que en esa habitación se acopiaba droga, máxime si Amelia Rivera Olguin manifestó que era precisamente Hidalgo Ibarra quien entraba y salía del domicilio portando bolsos con droga, logrando establecerse de esta forma que ambos acusados cumplen conjuntamente las funciones de guarda o custodia de la droga, porque las mantienen dentro de su esfera de resguardo, por ejemplo, portándolas, y porque se vinculan psicológicamente con dichas sustancias ilícitas con ánimo de señor y dueño.

Que, así las cosas, el tribunal, ponderando todas las pruebas rendidas en el transcurso del juicio, con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del Código Procesal Penal, ha dejado asentado: “Que a raíz de la investigación policial que permitió establecer la comercialización de droga en el inmueble ubicado en Avenida Américo Vespucio N°1775, Cerrillos, el 11 de julio de 2019, se sorprendió a Margarita Irma Gallardo Rivera y a Giovanni Paolo Hidalgo Ibarra poseyendo y guardando en el interior del dormitorio de ambos, 25 bolsas contenedoras de clorhidrato de cocaína, que arrojaron un peso bruto de 27 gramos, un envoltorio de nylon transparente embalado con

nylon negro, contenedor de clorhidrato de cocaína, que arrojó un peso bruto de 296 gramos, un envoltorio de cinta adhesiva transparente contenedor de clorhidrato de cocaína, que arrojó un peso bruto de 102 gramos; 27 bolsas contenedoras de cannabis sativa, marihuana, que arrojaron un peso bruto de 13 gramos, un trozo de cannabis sativa, marihuana, que arrojó un peso bruto de 14 gramos y restos de cannabis sativa, marihuana que arrojaron un peso bruto de 9 gramos. Asimismo, se mantenían en su poder un dosificador de plástico, un molidor, una balanza digital y \$98.080.- en una caja metálica, más \$39.000.- que Hidalgo Ibarra portaba consigo”.

OCTAVO: Calificación Jurídica. Que el delito tipificado en el artículo 3° de la Ley 20.000, en relación al artículo 1° de la misma, exige del agente traficar, a cualquier título, con sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública; entendiéndose por traficar, el importar, exportar, transportar, adquirir, trasferir, sustraer, poseer, suministrar, guardar o portar dichas sustancias, sin contar con la autorización competente.

En tal sentido, es indudable que el verbo rector de la conducta ilícita no se limita o restringe a la venta o a la comercialización de la droga, sino que se extiende también a la tenencia de droga, a cada una de las etapas de producción de la misma, a la circulación de las sustancias y a la comercialización de esta.

Que, a su vez, el Decreto N° 565 de 1996, que aprobó el Reglamento de la Ley 19.366, modificado por el N° 867 de fecha 19 de febrero de 2008 vigente para la Ley 20.000 y para los hechos de este juicio, en su artículo 1° señala a la cocaína y a la cannabis entre las sustancias o drogas estupefacientes productoras de dependencia física o síquica capaces de provocar grandes efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública a que se refiere el inciso primero del artículo 1° de la Ley 20.000.

Que, en el caso en comento, lo hallado en poder de los acusados corresponde a 28 gramos netos de cannabis sativa y a 427 gramos de una sustancia en polvo, en estado seco, de color blanco, correspondiente a 296.8

gramos de clorhidrato de cocaína al 35%, 23.8 gramos de clorhidrato de cocaína al 22% y 103.4 gramos de clorhidrato de cocaína al 17%.

En relación a esta última, tal como ha señalado la Corte Suprema reiteradamente y en particular en fallo Rol N°40.104-2017, “una innovación importante introducida en esta materia por la Ley N°20.000, en relación a su antecesora la Ley N°19.366, fue la obligación de indicar en los respectivos protocolos de análisis de droga la determinación de la pureza de la misma. Con esta modificación el legislador del año 2005 insistió en la identificación de la salud pública como bien jurídico tutelado por el delito descrito en la ley del ramo, al requerir del ente acusador que pruebe en el juicio la peligrosidad para la salud colectiva de la sustancia específica requisada, mediante el informe técnico que, entre otros elementos, debe expresar la composición y grado de pureza del producto examinado. De modo que la ausencia de ese dictamen o la falta en éste de todas las verificaciones requeridas por la ley, obsta a esa acreditación y acarreará consecuencias relevantes en el Derecho Penal material (SSCS Roles N°s. 21.599-2014 de 1 de septiembre de 2014, 25.488-2014 de 20 de noviembre de 2014, 3421-2015 de 14 de abril de 2015, 3707-2015 de 28 de abril de 2015, 7222-2015 de 20 de julio de 2015 y 36.837 de 28 de enero de 2016, entre otras)”.

Ello es así por cuanto el examen de la lesividad de esta figura penal consiste en el peligro concreto que debe revestir la sustancia estupefaciente respectiva para la salud pública, derivado de su naturaleza, peso o cantidad, contenido, composición y grado de pureza. En ese escenario, si bien se ha establecido que el compuesto analizado contenía también cloruros, lidocaína y Levamisol, lo cierto es que la sustancia consultada, en este caso, clorhidrato de cocaína, se encontraba presente en al menos 35% del total, debiendo necesariamente estimarse que en dichas concentraciones la sustancia provoca un grave peligro para la salud pública de un elevado número de potenciales consumidores, considerando la naturaleza de delito de peligro que reviste el ilícito analizado.

Si se considera además que la cocaína se halló distribuida en distintos lugares, con distintos pesos y en distintas concentraciones, sea que ello se explique porque proviene de distintos orígenes o porque viniendo de un mismo

proveedor, luego haya sido abultada o “pateada”, que se halló en el inmueble otro tipo de droga, 28 gramos netos marihuana, también en distintos contenedores, que parte de la droga se encontraba dosificada, pero la mayor parte no lo estaba, que se incautaron objetos propios de la manipulación de la droga, como una balanza digital, un molidor, cucharas plásticas, bolsas de nylon, y que además había una importante suma de dinero en efectivo que no pudo ser justificada, todos antecedentes que permiten establecer que los hechos tenidos por comprobados deben ser castigados como tráfico de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y no como microtráfico o tráfico en pequeñas cantidades, como solicita la defensa de Hidalgo Ibarra, sin que sea óbice para concluir de ese modo que también haya existido venta directa al consumidor final.

NOVENO: Participación. Habiéndose ya precisado que la conducta sancionada por el tipo penal de tráfico de drogas no se limita a la comercialización de la sustancia, sino que se extiende también a la tenencia o acopio de la misma, cabe consignar que la prueba rendida en autos, ha permitido establecer que ambos acusados ejecutaron esta modalidad de acción, consistente en guardar o almacenar importantes cantidades de sustancias ilícitas, en el interior del dormitorio que utilizaban como únicos ocupantes, desde que ha resultado probado que ambos residían en domicilio ubicado en Avenida Américo Vespucio N°1775, Cerrillos, de propiedad de Amelia Rivera Rivera Olguin, madre de Margarita Gallardo, el cual era utilizado de forma permanente por Gallardo Rivera e Hidalgo Ibarra, quienes pernoctaban de modo habitual en él, a pesar de tener registrado Giovanni Ibarra un domicilio distinto, como se acreditó con la documental aportada por su defensa.

En efecto, tanto la realidad como el ordenamiento jurídico admiten que una misma persona pueda tener más de un domicilio, como ocurre en este caso, lo que se acreditó con las declaraciones de los funcionarios policiales que participaron en la diligencia de entrada y registro a la propiedad antes mencionada, que dieron cuenta de haber encontrado a ambos acusados en el interior del domicilio principal del inmueble, que en dicha habitación había vestimentas de hombre y de mujer, además de otros objetos propios de una

pareja, como la libreta de ahorro de Gallardo Rivera, y la cédula de identidad de Hidalgo Ibarra, que se encontraba sobre el rack de la televisión, junto a una caja de perfumes que en su interior tenía bolsas de nylon para dosificar la droga, además de una cucharilla plástica con restos de una sustancia blanca; lo cual fue además refrendado por el Sargento Segundo Jaime Ramírez Vargas, que tomó declaración a doña Amelia Rivera, cuando expuso ante la policía que Giovanni Hidalgo vivía junto a su hija Margarita en el inmueble de su propiedad, y que era él quien habitualmente ingresaba al mismo portando bolsos con drogas. Finalmente, fue la propia acusada quien ratificó que su pareja vivía con ella a la época de la detención, puesto que, si bien inicialmente planteó que solo pernoctaba a veces con ella, cuando no se encontraba presente su madre, lo cierto es que, ante las preguntas directas de la fiscalía, terminó por reconocer que Hidalgo vivía con ella a la época de la detención.

Asimismo, cabe destacar que, si bien quedó asentado en juicio que en el inmueble residían más miembros de la familia, partiendo por su dueña Amelia Rivera Olguin, lo cierto es que toda la droga, dinero, y demás objetos relevantes incautados fueron hallados en el interior del domicilio principal, ocupado por los acusados, sin que se encontrara fuera de dicha habitación ningún elemento que pudiera relacionar a otros miembros de la familia o a terceros con el ilícito investigado o que pudiera hacer presumir que los objetos incautados pertenecen a otros distintos de los encartados.

Finalmente, es dable puntualizar que además de la conducta de tenencia o almacenamiento de droga, la acusada Margarita Gallardo desplegó acciones de venta y comercialización de las sustancias ilícitas, como se acreditó con las declaraciones incorporadas al juicio, que fueron plenamente concordantes con las imágenes que el tribunal pudo apreciar desde las fotografías y videos allegados al proceso, todo lo cual permitió al tribunal adquirir convicción más allá de toda duda razonable, de la participación de ambos encartados como autores del ilícito imputado en su contra.

DÉCIMO: Audiencia de determinación de pena. El fiscal invocó respecto de ambos acusados la agravante del artículo 12 N°16, de reincidencia específica, y para fundarla incorporó el Extracto de Filiación y Antecedentes de ambos. En el de Giovanni Hidalgo Ibarra consta una condena por el delito de

tráfico en pequeñas cantidades del Juzgado de Garantía de San Bernardo, a una pena de 541 días, luego otra del mismo tribunal, por delitos de tráfico en pequeñas cantidades y cohecho, a dos penas de 61 días, y, por último, una condena del Tribunal de Juicio Oral de Puerto Montt, del año 2014, a 9 años por el delito de tráfico de drogas. El extracto de Margarita Gallardo Rivera registra a su vez robo una condena del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, a una pena de 41 días por el delito de robo con fuerza, otra del mismo tribunal, a 61 días por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, y una última del mismo tribunal y por el mismo delito, pero a 541 días. Asimismo, se incorporó el oficio que informa que Giovanni Hidalgo Ibarra seguirá gozando de libertad condicional mientras no se resuelva la presente causa. Enseguida, se incorporó copia de sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral de Puerto Montt, mediante la cual se condenó a Giovanni Hidalgo Ibarra a una pena de 9 años y 200 UTM como autor de un delito de tráfico de drogas cometido el 3 de enero de 2014. Finalmente, se incorporaron sentencias del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, dictadas en los años 2014 y 2015, mediante las cuales se condenó a Margarita Gallardo Rivera a una pena de 61 y 541 días respectivamente, como autora de delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

En razón de lo anterior, solicita que se les condene a una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más una multade 40 Unidades Tributarias Mensuales, y el comiso de la droga, dinero y objetos incautados.

La **defensa de Giovanni Hidalgo**, atendida la concurrencia de una agravante y ninguna atenuante, solicita se le condene a una pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo y que se rebaje la multa a menos del mínimo, y se fije en 10 Unidades Tributarias Mensuales.

La **defensa de Margarita Gallardo** pide que se reconozca a su representada la circunstancia atenuante de colaboración sustancial, prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal y compense racionalmente con la agravante. En razón de ello, solicita se le condene a 5 años y un día, y se fije la multa en su mínimo, atendida la baja pureza o concentración de la droga, y que

de conformidad al artículo 70 se le conceda el máximo de parcialidades para su pago, sin costas.

DÉCIMO PRIMERO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad. En relación con la agravante establecida en el **artículo 12 N°16 del Código Penal**, basta para darla por establecida el hecho de haber sido ambos acusados condenados anteriormente como autores delitos de la misma especie, a saber, tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas o estupefacientes, en el caso de Giovanni Hidalgo Ibarra, o el mismo ilícito, pero en pequeñas cantidades, en el caso de Margarita Gallardo Rivera, según consta de los respectivos extractos de filiación y antecedentes, como también de las sentencias dictadas tanto por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, como por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

Asimismo, en relación a la atenuante del **artículo 11 N°9 del Código Penal**, a saber, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, invocada por la defensa respecto de Margarita Gallardo Rivera, es del parecer de estos jueces concederla, por cuanto la acusado dio una versión de los hechos concordante con la prueba de cargo rendida, reconociendo que la droga era de su propiedad y donde la almacenaba, elementos que contribuyeron a formar convicción de estos jueces en orden a condenar en los términos propuestos por la acusación fiscal.

DÉCIMO SEGUNDO: Determinación de la pena. Que al momento de determinar la sanción a aplicar al acusado debe tenerse presente:

a) Que la pena asignada al delito de tráfico ilícito de drogas es de presidio mayor en sus grados mínimo a medio;

b) Que, se trata de un delito que se encuentran en grado de desarrollo consumado, en el que a los acusados les ha correspondido responsabilidad en calidad de autores;

c) Que, respecto de ambos, concurre la circunstancia agravante del artículo 12 N°16, de reincidencia específica, y respecto de Margarita Gallardo Rivera, concurre también la atenuante del artículo N°9 del Código Penal, de colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos, las cuales

deberán ser compensadas racionalmente, según lo previsto en el artículo 68 del Código Penal.

d) Que no habiéndose justificado debidamente la tenencia de los objetos incautados al momento de la detención de los acusados, se ordena el comiso de la droga incautada, de los demás objetos utilizados en la comisión del ilícito, consistentes en un moledor, una balanza digital, un monedero, un banano, bolsas de nylon, una cuchara plástica, además de los \$98.080.- en dinero efectivo.

e) Finalmente, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales, atendida la facultad que el inciso final del artículo 47 del Código Procesal Penal confiere al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, se eximirá a los acusados del pago de las costas de la causa, por cuanto se encuentran privados de libertad, por lo que debe entenderse que posee una precaria situación económica, antecedente que también será considerado al momento de fijar el quantum de la multa asignada al delito de tráfico.

DÉCIMO TERCERO: Cumplimiento. Que, atendida la pena a imponer a los sentenciados, y lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 18.216, no es procedente sustituirla por ninguna otra alternativa, debiendo ambos cumplir éstas íntegramente, sirviéndole de abono el tiempo que han permanecido interrumpidamente privados de libertad por esta causa a contar del día 11 de julio de 2019, esto es, 1241 días para cada condenado, según consta del Sistema de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAJ).

Visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 N°9, 12 N°16, 14 N°1, 15 N°1, 21, 24, 25, 26, 28, 50, 68, del Código Penal; 1, 45, 47, 59, 60, 261, 295, 296, 297, 325, 326, 328, 333, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; 1 y 3 de la Ley 20.000; 1 de la Ley 18.216; se declara que:

I.- Se condena a **Margarita Irma Gallardo Rivera**, ya individualizada, a la pena de **cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más multa de diez unidades tributarias mensuales**, más las accesorias legales previstas en el artículo 28 del Código Penal, esto es, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de

inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autora del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, cometido el día 11 de julio de 2019, en la comuna de Cerrillos.

II.- Se condena a **Giovanni Paolo Hidalgo Ibarra**, ya individualizado, a la pena de **diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más multa de veinte unidades tributarias mensuales**, más las accesorias legales previstas en el artículo 28 del Código Penal, esto es, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, cometido el cometido el día 11 de julio de 2019, en la comuna de Cerrillos.

III.- Para el pago de la multa se concederán diez (10) cuotas mensuales, iguales y sucesivas, que deberán ser enteradas al quinto día del mes siguiente de ejecutoriada esta sentencia. El no pago de una de ellas hará exigible el total.

Si no pagaren la multa impuesta se les aplicará por vía de sustitución y apremio la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de Unidad Tributaria Mensual, no pudiendo exceder de los seis meses de privación de libertad.

IV.- Atendida las penas a imponer a los sentenciados, y lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 18.216, no es procedente sustituirla por ninguna otra alternativa, debiendo ambos cumplir éstas íntegramente, sirviéndole de abono el tiempo que han permanecido interrumpidamente privados de libertad por esta causa a contar del día 11 de julio de 2019, esto es, 1241 días para cada condenado, según consta del Sistema de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ).

V.- Que se ordena el comiso del dinero, la droga y demás objetos utilizados en la comisión del ilícito.

VI.- Encontrándose los sentenciados privados de libertad, se les eximirá del pago de las costas de la causa.

VII.- Ejecutoriado que sea el presente fallo, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 113 del Código Orgánico Tribunales y además con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.970, que creó el Sistema Nacional de Registros de ADN, y ofíciase al

Servicio Médico Legal a fin de que tome la muestra biológica correspondiente, determine la huella genética de los sentenciados y las incluya en el Registro de Condenados. Así también, atendida la pena asignada al delito en comento, debe comunicarse al Servicio Electoral para los efectos del artículo 17 de la ley 18.556, modificada por la ley 20.568.

Póngase, en su oportunidad a los sentenciados a disposición del 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

Regístrese y comuníquese oportunamente al 9° Juzgado de Garantía de Santiago, para su cumplimiento. Hecho, archívese.

Redactada por la Magistrado Andrea Coppa Hermosilla, Juez Titular del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

RIT N°72-2021.

RUC N°1900040587-9

Dictada por la Sala del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por los jueces Fernando Valenzuela González, quien la presidió, Pablo Urrutia Sulantay, y Andrea Coppa Hermosilla, titulares de este Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.